



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR. SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA

***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A - 127

Procedimiento: Ejecutivo.

Demandante: Cooperativa Antioqueña de Transportadores – Copatra.

Demandado: Rubiela Álzate Álzate.

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 017 2020 00284 01.

Decisión: Confirma auto.

Medellín, tres (3) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de apelación que interpuso la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia de Medellín el 26 de julio de 2023, a través del cual, se negó la solicitud de nulidad promovida por el apoderado judicial de la demandada, Sra. Rubiela Álzate Álzate.

ANTECEDENTES.

El apoderado de la demandada, Sra. Rubiela Álzate Álzate presentó incidente de nulidad con el propósito de que se invalide

«todo lo actuado, desde la providencia que dio por notificado del auto de mandamiento de pago a la ejecutada, ordenando que se verifique de nuevo dicha notificación».

Lo anterior, con base en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, pues relata que su poderdante nunca se enteró de la existencia este proceso porque, afirma, la notificación digital que en su momento se adelantó frente a ella, se realizó a un correo electrónico (alzate.rubiela.2020@gmail.com) distinto de aquel que usualmente utiliza (alzatealzater@gmail.com), el cual, además, sostiene que era plenamente conocido por la ejecutante mucho antes de haber presentado esta demanda, pues a través de este habían sostenido múltiples conversaciones con ocasión al crédito que aquí se busca satisfacer. Asimismo, censuró a la demandante por no haber notificado físicamente a su cliente en la siguiente dirección: calle 52 No 45-44 Ed. Los Búcaros, apto 601 de Medellín. En tal sentido, precisó:

«el apoderado de la demandante hace saber al despacho que el correo fue enviado a la dirección electrónica reportada en la demanda, el cual no había sido abierto, lo cual es cierto, toda vez que la demandada no tiene el uso de dicho correo pues como se ha manifestado, la dirección de correo electrónico con la que usualmente ha tenido comunicación por este medio, es alzatealzater@gmail.com al cual debió enviarse inicialmente los comunicados mediante los cuales se verificaba todos los trámite de notificación del mandamiento de pago, una vez enviada toda la documentación al respecto al correo reportado en la demanda sin constancia de haber sido abierto. Y si en dicha dirección tampoco se reportaba el haber sido abierto el correo mediante el cual se intentaba la notificación del mandamiento de pago, haber enviado toda la documentación física al respecto, a la dirección física de la demandada reportada en la demanda, la cual si es el lugar de domicilio de mi poderdante».

Por consiguiente, considera que su prohijsada quedó indebidamente notificada del mandamiento de pago librado en su contra.

El juzgado por auto el 18 de mayo de 2023, otorgó un traslado de tres días a la demandante para que se pronunciara respecto de la nulidad propuesta, oportunidad que aprovechó para solicitar su improcedencia, argumentando que la dirección electrónica que utilizó para notificar a la ejecutada sí era la correcta para tal propósito porque dicha parte la utilizó con fines judiciales en una acción de tutela que presentó antes del inicio del presente proceso contra la ejecutante y ante el Juzgado Decimosexto Civil Municipal de Oralidad de Medellín.

Mediante audiencia del 26 de julio de 2023, el señor juez *a quo* decidió negar la nulidad promovida por el apoderado de la demandada, exponiendo que,

«no hay lugar a la nulidad porque en el trámite de tutela adelantado por el Juzgado Decimosexto Civil Municipal de Oralidad de Medellín se notificaron todas sus actuaciones al mismo correo utilizado en este asunto para notificarla, de ahí que no sea óbice para que se tuviera como notificada del presente asunto, pues si bien es cierto existe una obligación establecida en el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022 de que se informen en el acápite de notificaciones de la demanda sobre la forma cómo se obtuvo el correo electrónico de la demanda y allegar las evidencias correspondientes, también es cierto que efectivamente al practicar las pruebas en este incidente de nulidad se logra establecer el correo electrónico sí es perteneciente a la demandada... como fue plasmado en la acción de tutela por ella presentada, lo que en últimas es lo que importa a efectos de determinar si se realizó o no se realizó en debida forma la notificación del mandamiento de pago, sin importar que, existiesen otros correo electrónicos. Lo importante era verificar al interior de este trámite que el correo electrónico al cual se realizó la respectiva notificación del mandamiento de pago era un correo electrónico que perteneciera a ella, y en todo caso, como fue ella misma quien suministró en la respectiva demanda de tutela ese correo electrónico y a través del cual se surtieron todas las notificaciones judiciales en ese trámite constitucional, no está demás decir que, para este Despacho ese correo también resultaba válido a efectos de considerarse notificada en debida forma al interior de este trámite ordinario...(archivo 11 C05 minuto 23:01 a 26:25)»

LA IMPUGNACIÓN.

Oportunamente el apoderado de la demandada interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, argumentando que la firma utilizada en la prenotada acción de tutela fue “superpuesta”, por lo que *«yo no puedo afirmar que fue presentada o no presentada»* por la ejecutada. Asimismo, insiste en que la dirección electrónica que reposa en dicho trámite constitucional no pertenece a la pasiva, pues señala que la única que sí es suya es la que se identifica bajo el siguiente dominio: alzatealzater@gmail.com. De igual manera, continuó con la crítica que le achaca a la actora por haber notificado electrónicamente a su contraparte cuando podía hacerlo de manera presencial a través de su dirección física, esto es, en la calle 52 No 45-44 Ed. Los Búcaros, apto 601 de Medellín (cfr. Archivo 11 C05 minuto 26:27 a 31:54).

El juzgado, al resolver el recurso horizontal, se mantuvo en su decisión. Explicó que,

«más allá de que a través del recurso del apoderado de la parte incidentista pretenda cuestionar la legalidad de la acción de tutela que se tramitó, lo cierto es que fue una acción de tutela que se tramitó y se falló a instancia de la paye demandada en contra de la parte demandante, es la constancia que obra en el expediente de la cual se aportó prueba del expediente completo al interior de este trámite y una vez se profirió auto al interior del expediente donde se tuvo como prueba, en ningún momento fue cuestionado su legalidad o su validez más allá de que se diga que la firma fue superpuesta... lo cierto es que en principio goza de presunción de que ese trámite fue propuesto por la Sra. Rubiela toda vez que, no fue cuestionado por fuera ni al interior de este trámite... en cuanto a la discusión de tener una dirección física a la que debió haberse intentado su notificación, lo cierto es que, como bien lo indica el apoderado de la parte demandante, luego de la pandemia y a través del decreto que modificó en varios aspectos lo concerniente a la Ley procesal civil que de igual manera fue ratificado a través de una Ley posterior, se habilitaba por facilidad para que las partes realizaran la notificación a través de correo electrónico...»

La parte demandante haciendo uso del traslado previsto en el artículo 322 numeral 3º del CGP, se pronunció sobre la alzada interpuesta, expresando en dicha oportunidad que, causaba extrañeza que su contraparte hablara de una firma "superpuesta" dando a entender como si de un delito se tratara, cuando nada ha hecho para hacer valer lo que de algún modo está sugiriendo, sea al interior de este trámite o por fuera de aquel a través de una denuncia penal.

Posteriormente, el juzgado concedió la apelación interpuesta en subsidio, y para resolver la misma se,

CONSIDERA,

El auto que resuelva una solicitud de nulidad es susceptible del recurso de apelación conforme lo dispone el artículo 321 numeral 6º del CGP.

Habiendo aptitud legal para decidir de fondo el disenso, comencemos por tener de presente que el artículo 133 numeral 8º del CGP, dispone:

«El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: ... 3. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda...».

Es claro que las consecuencias previstas en la denota norma se abren camino cuando estamos en presencia de una notificación que no reúne los requisitos legalmente establecidos para que sea válida. Y tratándose de la electrónica, tales exigencias las hallamos en el artículo 8º de la Ley 2213 de 2023, cuyo tenor consagra:

«Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso. **PARÁGRAFO 1o.** Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro. **PARÁGRAFO 2o.** La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales. **PARÁGRAFO 3o.** Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal (UPU) con cargo a la franquicia postal».

De la norma trasunta podemos constatar el paso a paso para que una notificación electrónica surta los efectos esperados de ella. La etapa inicial comienza cuando el interesado pone a disposición del juez un correo electrónico acompañado con *«el juramento relativo a que el canal escogido es el utilizado por el demandado, la explicación de la forma en la que lo obtuvo y la prueba de esa circunstancia¹»*, siendo estas las únicas exigencias para

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC4737 del 18 de mayo de 2023, Exp: 11001-02-03-000-2023-01792-00, MP Dr. Luis Alonso Rico Puerta

poder continuar con el siguiente paso, esto es, la verificación de tales presupuestos por parte de la autoridad judicial a quien le corresponderá corroborar, dentro sus capacidades, la *«información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las (...) entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales (Parágrafo 2º del art. 8 ibidem)»*². Luego continuamos con la prueba del “envío” de la notificación electrónica que puede lograrse a través de cualquier medio idóneo *«dentro de los cuales pueden encontrarse capturas de pantalla, audios, videograbaciones, entre otros medios de naturaleza documental que deberán ser analizados en cada caso particular por los jueces naturales de la disputa»*³, por lo que una vez acreditado tal supuesto junto con los demás reseñados, *«hay una alta probabilidad de que ese medio resulte efectivo para el enteramiento del demandado o convocado»*⁴, operando a partir de ahí, *«la presunción legal contenida en el canon en cita, esto es, que «se entenderá realizada» la notificación»*⁵. Por consiguiente, *«el deber que tiene el demandante es de acreditar “el envío” de la providencia, con lo que se presume efectuada la notificación, motivo por el cual no es necesario, para estos fines, acreditar la recepción del mensaje de datos»*⁶. De tal suerte que, superado lo anterior, finalizamos con el último de los pasos mencionados, consistente en que, *«El enteramiento se entiende surtido dos días hábiles siguientes al envío del mensaje al canal seleccionado y, por regla general, allí*

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC4737 del 18 de mayo de 2023, Exp: 11001-02-03-000-2023-01792-00, MP Dr. Luis Alonso Rico Puerta

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC865 del 8 de febrero de 2023, Exp: 11001-02-03-000-2023-00148-00, MP Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC4204 del 3 de mayo de 2023, Exp: 11001-02-03-000-2023-01010-00, MP Dr. Francisco Ternera Barrios.

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC16733 del 14 de diciembre de 2022, Exp: 68001-22-13-000-2022-00389-01, MP Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC1204 del 15 de febrero de 2023, Exp: 25000-22-13-000-2022-00518-02, MP Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

empieza a contar el término de contestación o traslado, salvo que el mismo demandante o el juez se percaten de que el mensaje no fue enviado con éxito, o cuando la persona que se considere afectada solicite la nulidad de lo actuado y, en ese trámite, sobre la cuerda de la nulidad procesal proponga el debate probatorio en torno a la efectiva recepción del mensaje⁷». Ahora, sobre este último paso, conviene precisar que, «no basta con la manifestación del demandado de no haber recibido la notificación, toda vez que este, cuando se asuma perjudicado, debe solicitar la nulidad de lo actuado, indicando, bajo gravedad de juramento, que no se enteró de la providencia notificada, de acuerdo con la norma en cita⁸».

Dentro del presente asunto, el apoderado de la apelante argumenta que la decisión censurada no puede validar una notificación electrónica que se surtió en una canal digital que no es utilizado por su prohijada para tales fines, y el hecho de que aquel se hubiera abonado a una acción de tutela de la cual, «yo no puedo afirmar que fue presentada o no presentada» por la ejecutada, no acredita su idoneidad para el enteramiento de este proceso, en tanto que, afirma que dicho trámite constitucional, se colocó para su detonación, una firma “superpuesta”. Asimismo, fustiga a la ejecutante por no utilizar la dirección física para notificar a su poderdante de manera presencial.

Pues bien, para la suscrita magistrada ninguna relevancia posee el hecho de que la ejecutante hubiera preferido la notificación electrónica por encima de la presencial, pues como bien se ha dicho reiteradamente por nuestra

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC865 del 8 de febrero de 2023, Exp: 11001-02-03-000-2023-00148-00, MP Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC1204 del 15 de febrero de 2023, Exp: 25000-22-13-000-2022-00518-02, MP Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

jurisprudencia constitucional, *«frente a la coexistencia de dos regímenes de notificación personal -presencial y por medio del uso de las TIC-, ha dicho, Esta Sala tiene decantado que, en los tiempos que corren, los sujetos procesales tienen la libertad de optar por practicar sus notificaciones personales, bien bajo el régimen presencial previsto en el Código General del Proceso –arts. 291 y 292-, o por el trámite digital dispuesto en la Ley 2213 de 2022 -art. 8-. De igual forma, tiene sentado que «[d]ependiendo de cuál opción escoja[n], deberá[n] ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas, a fin de que el acto se cumpla en debida forma». (STC7684-2021, STC913-2022, STC8125-2022, entre otras). De allí que no haya duda sobre la vigencia actual de esas dos formas de enteramiento y del deber de las partes de ceñirse a los postulados propios de su escogencia. (STC16733-2022)⁹». Por lo que, resultaba totalmente válido que la ejecutante optara por la notificación electrónica, sin que deba censurarse bajo ninguna causa dicho actuar.*

Ahora, respecto de las acusaciones de ilegalidad (firma “superpuesta” e incertidumbre sobre la autoría de dicha rúbrica) que el apoderado de la apelante dirige contra el medio (acción de tutela obrante en el archivo 07 C05) utilizado por la ejecutante para obtener la dirección electrónica de su contraparte, debe decirse que aquellas carecen soporte probatorio. Y sobre este preciso punto, recuérdese –como se expuso en reglones precedentes– que la simple manifestación de inidoneidad de un determinado canal digital, no es suficiente para invalidarlo, tanto más cuando aquel goza de presunción legal tras haberse probado su efectivo envío con el lleno de los requisitos exigidos para el efecto (el juramento relativo a que el canal escogido es el

⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC1898 del 2 de marzo de 2023, Exp: 11001-22-03-000-2022-02599-01, MP Dra. HILDA GONZÁLEZ NEIRA.

utilizado por el demandado, la explicación de la forma en la que lo obtuvo y la prueba de esa circunstancia). Por consiguiente, la apelante debía correr con la carga de probar los supuestos que en su alzada pretendía hacer valer y al no hacerlo, la validez de su notificación electrónica permanece incólume, debiéndose confirmar la decisión apelada.

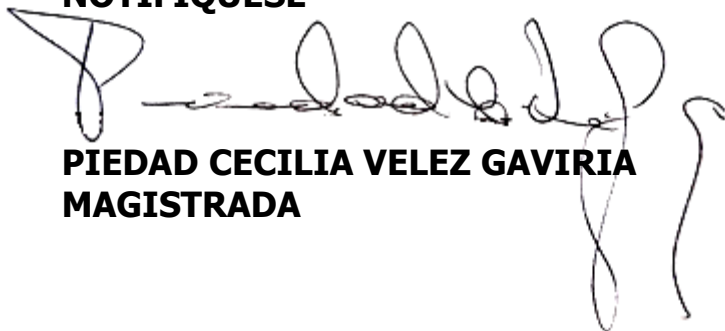
En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada,

RESUELVE,

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicadas.

SEGUNDO. Devuélvanse las piezas digitales al despacho de origen. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

NOTIFIQUESE



PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada
Sala 002 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0901acf20ba42138f7feb497f1d899193ddaddb794fae98a334bcf8de42b7c84**

Documento generado en 03/11/2023 01:42:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>